

Jorge Luis Batlle Ibáñez

Uruguay, Presidente de la República

Duración del mandato: 01 de Marzo de 2000 - de de

Nacimiento: Montevideo, departamento de Montevideo, 25 de Octubre de 1927

Partido político: PC

Profesión: Periodista



Resumen

Jorge Luis Batlle Ibáñez es el heredero de una de las más célebres dinastías políticas de Uruguay. Siendo en origen una familia catalana emigrada desde Sitges, población de mar cercana a Barcelona, al país platense a principios del siglo XIX, antes de la independencia de España en 1830, los Batlle han estado en la médula del Partido Colorado (PC), histórica formación de tradición liberal y progresista, si bien muchas veces escorada a la derecha.

Biografía

1. Un dirigente de casta del Partido Colorado
2. Otras tres apuestas presidenciales tras la restauración de la democracia
3. Una Administración marcada por la crisis económica
4. La debacle financiera de 2002
5. Pérdida de la iniciativa política hasta el final del mandato

1. Un dirigente de casta del Partido Colorado

Junto con su rival, el, en origen, más conservador Partido Nacional (PN), también llamado Blanco, el PC conformó un duopolio por el que los dos se alternaron irregularmente en el poder durante 170 años, aunque los colorados gobernaron mucho más tiempo que los blancos; precisamente, el período presidencial de Jorge Batlle, entre 2000 y 2005, marcó el final de esta larguísima supremacía desigualmente compartida.

Así, su tío-abuelo fue José Pablo Batlle Ordóñez (1856-1929), quien ocupara la Presidencia de la República tres veces, en 1899, en 1903-1907 y en 1911-1915; a su vez, José Batlle era hijo de Lorenzo Cristóbal Batlle Grau (1810-1887), presidente en 1868-1872. El padre, Luis Conrado Batlle Berres (1897-1964), sobrino de José Batlle, ocupó la suprema magistratura en los períodos 1947-1951 y 1955-1956. Su madre era la señora Matilde Ibáñez Tállice.

El batllismo, más tarde identificado con el PC en su conjunto, propugnó un modelo reformista liberal en el que el progreso económico debía asumir una connotación moral orientada al bienestar común de todos los ciudadanos. En esto se oponía al liberalismo individualista y conservador, contrario al Estado interventor, que profesaba el PN. De todas maneras, la mezcolanza de doctrinas y estilos de que han hecho gala a lo largo de su historia estos dos partidos fuertemente fraccionados y verticalizados terminó por hacer vanos los intentos de clasificación ideológica.

La persecución política de la que fue objeto durante la dictadura de su conmlitón Gabriel Terra, elegido en 1930 en un contexto de agudas divisiones en el coloradismo, obligó a Luis Batlle Berres a cambiar de residencia en numerosas ocasiones, de manera que su hijo Jorge repartió sus estudios primarios en escuelas de Uruguay, Argentina y Brasil. Tras completar la secundaria en liceos de Montevideo, concretamente el Público N° 6 y los privados Bauzá y Elbio Fernández, el joven ingresó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

En 1942, durante la Administración colorada del general Alfredo Baldomir Ferrari, Batlle emprendió su activismo formal en el PC al servicio de la aspiración presidencial de su padre y un año después se introdujo en el periodismo como conductor de un programa de jazz en Radio Ariel, propiedad de la familia. En 1945 se integró en los comités ejecutivos Departamental

montevideano y Nacional del partido, obviamente como representante de la fracción batllista que continuaba el legado de sus ascendientes, y dos años después, coincidiendo con la llegada de su padre a la Presidencia de la República, fue elegido secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo. En 1948, después de una estadía lectiva en Londres, comenzó a escribir en el diario Acción, que editaba su progenitor. Su vínculo con este medio se prolongó durante un cuarto de siglo, siendo sucesivamente reportero, jefe de redacción y finalmente director del mismo.

En 1956 se licenció en Derecho y Ciencias Sociales, y en las elecciones de noviembre de 1958, que ganaron los blancos tras 90 años ininterrumpidos de gobiernos colorados, adquirió su primer mandato representativo como diputado por Montevideo en la Lista 15 (batllista) del PC en la Cámara de Representantes, que inauguró sus sesiones en febrero de 1959. Reelegido en los comicios de noviembre de 1962, fue uno de los redactores de la reforma constitucional de 1966 que restauró el poder ejecutivo unipersonal, al cabo de 14 años de presidencia colegiada a través del Consejo Nacional de Gobierno (CNG). De hecho, el segundo ejercicio presidencial de su padre estuvo sujeto a la estructura del CNG, que se renovaba cada año manteniendo el componente bipartito y redistribuyendo las cuotas de poder en función de los resultados electorales.

En las elecciones de noviembre de 1966, de acuerdo con el sistema de candidaturas por lemas y sublemas entonces vigente, que permitía al PC y al PN presentar más de un aspirante a las presidenciales, Batlle fue, con 39 años, uno de los postulantes del coloradismo, pero la votación la ganó para el partido el general retirado Óscar Diego Gestido Pose, quien no cumplió el año en el poder porque falleció por causas naturales en diciembre de 1967, teniendo que tomar las riendas el hasta entonces vicepresidente, Jorge Pacheco Areco. Tras concluir su mandato legislativo el 14 de febrero de 1967, Batlle realizó una segunda tentativa presidencial en la edición siguiente, la del 28 de noviembre de 1971. De nuevo, fue otro colorado el titular del lema más votado y quien se llevó la Presidencia, el ex ministro de Agricultura Juan María Bordaberry Arocena.

Entre uno y otro lance electoral, Batlle, a finales de 1970, se vio envuelto en un lance de una naturaleza mucho más física y con grave riesgo para su vida: nada menos que un duelo a sable, del que no salió precisamente ileso, con un adversario que supuestamente había afrentado a su honor y que, para mayor extrañeza, era compañero del partido. La verdad es que cualquier persona no familiarizada con la singular persistencia entre la élite política e intelectual uruguaya de los "duelos entre caballeros", al más puro estilo decimonónico, que incluso tenían cobertura legal, podía considerar este incidente, en absoluto aislado, una ridícula y peligrosa extravagancia.

Claro que los ímpetus retadores venían de familia: en abril de 1920, su tío-abuelo, don José Batlle, mató de un certero disparo al dirigente liberal Washington Beltrán, en un duelo a pistola reclamado por el ex presidente tras ser llamado por Beltrán "rey del fraude" en el diario que éste dirigía. Y en noviembre de 1957, su mismo padre, don Luis Batlle, se enfrentó a sablazos con el general ultraderechista, a la sazón su antiguo ministro de Defensa, Juan Pedro Ribas, terminando el desafío con sendos cortes en el brazo derecho del primero y la mano derecha del segundo. Fue precisamente el famoso duelo Batlle-Beltrán, que conmocionó a la sociedad de la época, el que empujó a la Asamblea General a regularizar por ley, y con carácter retroactivo, las llamadas justas "de honor"; en cualquier otra parte del mundo, dejar malherida o matar a una persona en tales circunstancias habría sido objeto de persecución penal.

El suceso de 1970 empezó cuando el abogado y periodista, que continuaba en el candelero como director de Acción, encajó como una gravísima injuria la acusación vertida por el senador colorado Manuel Flores Mora de que se había lucrado en una operación de compraventa de divisas aprovechándose del conocimiento anticipado de una devaluación del peso uruguayo. Batlle quería reparar su honor a toda costa, pero en ese momento estaba fuera del país. Entonces, terció como factótum su correligionario batllista Julio María Sanguinetti Coirolo, quien era subdirector de Acción y, lo que resultaba más asombroso, ministro de Industria y Comercio en el Gobierno pachequista.

Sanguinetti, en representación de su amigo, retó a Flores Mora a un duelo a sable, de filo y de punta, a primera sangre, que se celebró el 21 de octubre. Según narran las crónicas, tras media hora de mandobles y estocadas, el futuro presidente de la República hirió de un profundo tajo en la mano a su adversario. El duelo terminó en ese instante, pero la peripecia no terminó ahí, ya que Batlle regresó al país y, no satisfecho con la victoria de Sanguinetti, mandó a su vez sus padrinos al ofensor. Las normas exigían que los duelistas se enfrentaran en perfectas condiciones físicas, así que Batlle tuvo que esperar unos días, hasta que se curara la mano del senador. El 11 de noviembre Batlle y Flores desenvainaron sus espadas y, según se cuenta, en el tercer asalto, cuando ya se había infligido la primera sangre, sólo la intervención de los padrinos impidió que los dos continuaran acometiéndose hasta un fatal desenlace. El tribunal de honor dictaminó un empate.

Centrado en su profesión periodística y en la política interna del coloradismo, Batlle, en calidad de líder de la facción Unidad y Reforma (la Lista 15), de tendencia centroderechista, se erigió en una de las voces más críticas con la política de Bordaberry, proclive a contemporizar con las Fuerzas Armadas para conseguir la liquidación, más allá de los límites impuestos por el Estado de Derecho, de la guerrilla urbana del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). A su juicio, la imposición de las soluciones puramente militares para acabar con la subversión izquierdista de los tupamaros entrañaba un enorme peligro para la institucionalidad civil y la democracia uruguayas, advertencia que resultó ser una certera predicción.

El 27 de octubre de 1972, tras acusar a los militares desde su tribuna periodística de utilizar "métodos nazis" y de estar conchabados de hecho con los tupamaros para quebrar el orden constitucional, Batlle fue detenido bajo la acusación de agraviar la moral de las Fuerzas Armadas. El episodio levantó una fuerte polémica por considerarlo los sectores de la opinión pública más comprometidos con la democracia una intromisión flagrante del Ejército en el ejercicio de la libre opinión.

Como señal de protesta, abandonaron el Gobierno los tres ministros de la fracción batllista, y el propio líder del PN, Wilson Ferreira Aldunate, adversario político pero viejo conocido de Batlle e igualmente hostil a la alianza fáctica formada por el coloradismo oficial y los militares, condenó el arresto. El 20 de noviembre Batlle fue puesto en libertad tras aceptar los diputados de la Lista 15 sumar sus votos a la propuesta gubernamental de prorrogar el estado de guerra interno, que llevaba implícito la suspensión de garantías constitucionales, vigente desde el 15 de abril del año en curso.

La asunción total del poder por las Fuerzas Armadas en el autogolpe de Estado perpetrado por Bordaberry el 27 de junio de 1973, que supuso la disolución de la Asamblea General, la

introducción del Gobierno por decreto, la inhabilitación de todos los dirigentes políticos y la prohibición de la actividad de los partidos, precipitó asimismo el cierre, entre otros medios, del diario Acción. En 1976, el año en que los militares defenestraron a Bordaberry y pusieron en su lugar a un presidente de paja aún más manejable, el blanco Aparicio Méndez Manfredini, Batlle tuvo que renunciar también a la dirección de Radio Ariel.

En los once años siguientes, Batlle, sometido a estrecha vigilancia por el Gobierno de facto debido a su trayectoria democrática y contestataria, desarrolló actividades empresariales privadas en el sector agropecuario, pero desde la clandestinidad continuó desempeñando labores directivas en el PC, siendo uno de los tres miembros de su Directorio. Ello le costó varias detenciones, de breve duración. En 1983 cesó como secretario del Comité Ejecutivo del partido y en 1984, luego del acuerdo alcanzado por los representantes de los principales partidos y las Fuerzas Armadas, fue uno de los beneficiarios del levantamiento de las proscripciones que pesaban sobre los responsables políticos de la oposición civil.

2. Otras tres apuestas presidenciales tras la restauración de la democracia

En las elecciones democráticas del 25 de noviembre de 1984 Batlle salió elegido senador con un mandato de cinco años dentro de la Lista 15 y desde el 15 de febrero de 1985 fue el encargado de presidir la Asamblea General que inauguró las instituciones de elección popular. A la Presidencia de la República accedió el primero de marzo Julio María Sanguinetti, que lideraba la facción colorada entonces dominante, el Foro Batllista, orientada al centroizquierda y cercana a la socialdemocracia.

En octubre de 1986 Batlle encabezó la delegación nacional en el arranque del XLI período regular de sesiones de la Asamblea General de la ONU, labor que iba a repetir doce años después, en la LIII Asamblea General. Fuera de sus compromisos institucionales, destinó tiempo al hacer intelectual como conferenciante sobre temas de filosofía, política y economía en eventos celebrados dentro y fuera de Uruguay. Cabe destacar, por ejemplo, su participación en febrero de 1988 en las actividades del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), con sede en Madrid.

El 28 de mayo de 1989 el senador ganó a su competidor, Enrique Tarigo, que era el vicepresidente de la República y que gozaba del respaldo de Sanguinetti, en la primaria del sublema Batllismo Unido para la definición del candidato presidencial de la facción, votación que estuvo abierta a cualquier ciudadano previamente registrado en el padrón electoral. El día de la elección nacional, el 26 de noviembre, Batlle superó al otro aspirante colorado, el ultraderechista Pacheco Areco, por sólo una décima de diferencia con el 14,8% de los votos.

No obstante, el vencedor absoluto fue el candidato blanco Luis Alberto Lacalle de Herrera, quien totalizó a su favor el voto de los tres sublemas del PN, aunque él también fue el candidato individual más votado. En la liza personal, Batlle quedó tercero tras Lacalle y el general retirado Líber Seregni Mosquera, el postulante de la coalición de izquierda Frente Amplio (FA) ?y, por cierto, protagonista del último duelo conocido por motivos políticos, el que le había enfrentado al quisquilloso general Ribas, pistola en mano, en diciembre de 1971. El mandato senatorial de Batlle terminó el 14 de febrero de 1990. Hasta enero de 1992, su Lista 15, también conocida como Batllismo Radical, formó parte de la Coincidencia Nacional, una amplia coalición de

facciones blancas y coloradas destinada a dar soporte parlamentario al Gobierno de Lacalle; entonces, Batlle, decepcionado por la, a su entender, falta de brío de Lacalle en la ejecución de las reformas liberales de la economía, retiró su apoyo al Gobierno y se pasó a la oposición.

El 27 de noviembre de 1994 Batlle realizó su cuarto intento de llegar a la jefatura del Estado y enarbolando de nuevo un programa que fue calificado como de derecha neoliberal. Con el 5,1% de los votos, el veterano político quedó rezagado entre Sanguinetti y el tercer candidato colorado, el también ex presidente Pacheco, pero su cuota de sufragios fue instrumental para que Sanguinetti se llevara la Presidencia con un total del 32,3%, ya que el candidato individual mejor situado fue el oncólogo socialista Tabaré Ramón Vázquez Rosas, postulante de la coalición de izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA). Batlle, que también concurrió inscrito en la lista para la Cámara de Senadores, sí ganó el mandato legislativo para el período 1995-2000.

Miembro de las comisiones senatoriales de Industria y Energía, Hacienda, Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Partidos Políticos, en 1996 participó en los trabajos de redacción de la reforma constitucional que, entre otras novedades, estableció la candidatura presidencial única por partido y la doble vuelta electoral, con lo que quedó derogada la casi centenaria Ley de Lemas. En las primarias celebradas por el PC el 25 de abril de 1999 Batlle se proclamó candidato único del partido para las elecciones presidenciales del 31 de octubre de ese año. El primero de junio renunció al escaño de senador para centrarse en su quinto proyecto presidencial.

Batlle presentó un programa económico centrado en la apuesta por el crecimiento -1999 iba a cerrar con una recesión del 2,5% debida a la drástica caída de las exportaciones, provocada a su vez por la aguda depreciación de la moneda brasileña, en flotación cambiaria desde enero-, el mantenimiento de la estabilidad de los precios ?la inflación rondaba el 6% anual- y los cambios, la estricta responsabilidad fiscal, la mejora de la competitividad mediante la remoción de obstáculos jurídicos y estructurales a la libre actividad económica, y, de puertas al exterior, la búsqueda de negociaciones multisectoriales en el ámbito de la integración regional, siendo siempre la primera referencia el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que Uruguay compartía con Argentina, Brasil y Paraguay.

Asimismo, planteó el desarrollo de la industria turística, la continuidad de las inversiones sociales para mejorar la calidad de vida de la población ?unos gastos que tendrían que cuadrar con la prometida austeridad presupuestaria-, y la creación y captación de empresas tecnológicamente avanzadas en los sectores agropecuario y de servicios.

El 31 de octubre de 1999 Batlle fue superado con el 31,3% de los votos por el frenteamplista Vázquez, que obtuvo el 38,5%. El nacionalista Lacalle quedó tercero. Al no alcanzar ningún candidato la mayoría absoluta del 50% más uno de los votos, fue necesario estrenar el mecanismo de la doble vuelta. A la ronda del 28 de noviembre Batlle llegó con ventaja sobre Vázquez gracias el trasvase en masa del voto útil conservador; más allá de su rivalidad bisecular, colorados y blancos se pusieron de acuerdo para cerrar el paso al anterior intendente municipal de Montevideo, cuya profesión de fe socialista y sus fuertes críticas al liberalismo de mercado les producían viva inquietud.

Sin sorpresas, por tanto, Batlle se impuso con el 51,6% de los sufragios y aseguró la continuidad por otros cinco años de la hegemonía bipartidista asentada desde la guerra civil de 1836-1838. El 1 de marzo de 2000 el estadista electo recibió la banda de presidente de la República para los próximos cinco años, en una ceremonia a la que asistieron los mandatarios de Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela y Bolivia. En su discurso inaugural, Batlle enmarcó los retos que tenía por delante en las nuevas realidades de un mundo globalizado. Así, señaló que "las regulaciones, los monopolios, los oligopolios, las trabas en todas sus formas, los mercados protegidos, tanto de los sectores públicos como de los privados, dificultan y entorpecen la evolución de esta sociedad uruguaya", e instó, "entre todos", a "poner a Uruguay en el mundo real".

3. Una Administración marcada por la crisis económica

Batlle llegaba al poder en la República Oriental del Uruguay más de tres décadas después de su primer intento, a la respetable edad de 72 años y con una fama de político culto, perspicaz y un tanto excéntrico, capaz de asombrar a propios y extraños con declaraciones inopinadas, algunas ingeniosas, otras polémicas, sobre cualquier tema de actualidad. Sus primeros pasos como presidente causaron muy buena impresión, incluso entre la oposición izquierdista, que se encontró con un mandatario colorado abierto a establecer con ella unas relaciones de cordialidad y diálogo (no en vano, la minoría del PC en la Asamblea, donde sólo tenía 32 diputados y 10 senadores, iba a requerir negociaciones con el EP-FA y el PN para sacar adelante la legislación liberalizadora de la economía y el presupuesto plurianual), y no hacían presagiar la calamidad económica y financiera sin precedentes que muy pronto iba a abatirse sobre el país

De entrada, Batlle recibió en su despacho en el séptimo piso del Edificio Libertad a familiares de desaparecidos durante la dictadura militar y se comprometió personalmente en la resolución, con espectaculares resultados, de algunos casos de bebés robados a sus madres para ser dados en adopción. A continuación, el 9 de agosto, un decreto presidencial instituyó un panel investigador denominado Comisión para la Paz (CP) que, por una "obligación ética del Estado", recibió la misión de establecer la suerte corrida por los 38 ciudadanos uruguayos ?cifra oficial que corresponde a las denuncias formalizadas- detenidos y hechos desaparecer por las Fuerzas Armadas de su país entre 1973 y 1985.

La implicación particular del presidente y la creación de la CP fueron unánimemente considerados unos pasos muy importantes para el esclarecimiento de las violaciones de Derechos Humanos cometidas bajo el Gobierno de facto. También, marcaron el contrapunto de la postura mantenida por sus dos predecesores en el cargo. Sanguinetti, en particular, había afirmado enfáticamente que la cuestión de los desaparecidos estaba cerrada. Ciertamente era que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 y sancionada mediante plebiscito en 1989, protegía a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía contra toda persecución judicial por presuntas actuaciones criminales, pero no impedía investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos.

El 21 de junio de 2000 la Cámara de Representantes aprobó, con los votos a favor del PC y el PN, una ley de "urgencia" que contenía una serie de medidas para aliviar los efectos de la recesión provocada por la devaluación competitiva del real brasileño. La ley estableció rebajas tributarias al sector agropecuario, pilar de las exportaciones, así como medidas de fomento de la inversión y el empleo en el sector industrial, como una reducción de los impuestos a las

actividades económicas. También, autorizaba al capital privado la adquisición de tierras y establecimientos comerciales de titularidad pública con acciones al portador y a través de sociedades anónimas. Justo un año después, el Gobierno anunció varias reformas para flexibilizar la legislación en materia laboral y nuevas medidas fiscales para reestructurar la deuda de los productores agrícolas y disminuir las cargas de los empresarios, algo que Batlle consideraba insoslayable ante la extensión por todo el país de la epidemia de fiebre aftosa, que estaba causando verdaderos estragos en la cabaña ganadera.

Toda vez que el bloque izquierdista de la Asamblea y el poderoso Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) tachaban las políticas del Gobierno de antisociales y de ineficaces para conjurar las dificultades económicas, Batlle apostó por sacar adelante sus planes con el sólo respaldo del PN, sin concertación social. Por de pronto, el agravamiento de la crisis del sector agropecuario a causa de las turbulencias en el comercio interno del MERCOSUR, las pérdidas provocadas por la fiebre aftosa y la debilidad de las cotizaciones internacionales de la carne de vacuno, la lana y el arroz, unido al encarecimiento del petróleo, tuvo un reflejo muy negativo en la producción nacional y el nivel de empleo: 2001 terminó con un retroceso del PIB del 3,1% y con un índice de paro rebotado al 15%, tres puntos más que en marzo de 2000.

El 27 de diciembre de 2001 el presidente se apuntó un tanto con la derogación por la Asamblea de los monopolios que desde 1931 poseía la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) sobre la importación, la exportación y el refinado de petróleo crudo, y sobre la exportación de derivados de petróleo. La cancelación de estos privilegios del Estado, convertida por el presidente en la piedra angular de su programa de reformas estructurales, abrió las puertas a la participación de compañías privadas en el negocio del hidrocarburo.

Al tiempo que se esforzaba en ejecutar las medidas que él creía correctas para recuperar el buen tono económico, Batlle fue perfilando su postura con respecto al MERCOSUR. En la primera cumbre de presidentes a la que asistió, la celebrada en Buenos Aires el 30 de junio de 2000, el mandatario uruguayo defendió la aspiración de Chile a ingresar como miembro de pleno derecho con el objeto de robustecer la posición de la organización de cara a las negociaciones para la puesta en marcha del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), cuya entrada en servicio a partir de 2005 él consideraba perentoria, entre otras razones, como una alternativa a las enormes dificultades que los productos agrícolas sudamericanos hallaban para penetrar en el mercado común de la Unión Europea (UE); en 2000, el establecimiento de un área de libre cambio entre el MERCOSUR y la UE era visto como un escenario relegado a un futuro tan lejano como incierto.

Batlle, en lo que se alejaba del enfoque regionalista de su colega brasileño, Fernando Henrique Cardoso, planteaba el ALCA como el ámbito ideal en el que negociar un acuerdo bilateral entre el MERCOSUR y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, de Estados Unidos, México y Canadá), a cuyo acceso preferencial por Uruguay el Gobierno otorgaba la mayor importancia por tratarse del segundo mercado cliente después del MERCOSUR. Más aún, Batlle deslizó su escepticismo con los logros alcanzados por el MERCOSUR, aunque sus críticas estuvieron centradas en el proteccionismo europeo.

El caso era que el presidente buscaba con ahínco el acceso al mercado continental americano y

diversificar el comercio exterior porque temía, y con razón, las devastadoras consecuencias que para la economía uruguaya tendría la pertinacia de la crisis en Brasil y Argentina: los dos motores del MERCOSUR absorbían el 41% de las exportaciones uruguayas, y cualquier flaqueza allí, fuera una contracción de las importaciones o una devaluación monetaria, tenía un impacto inmediato y brutal en un país pequeño que basaba su PIB en las exportaciones de productos del campo.

En la III Cumbre de Las Américas, en abril de 2001 en Quebec, Batlle realizó una ardiente defensa del ALCA y llegó al punto de instar a los uruguayos a que hicieran oír en el Congreso de Washington su voz favorable a la aceleración de la concreción del vasto proyecto de desarme arancelario. Luego, en 2002, ante el arrastre de la economía nacional por el colapso argentino, el presidente se lanzaría a buscar desesperadamente una salida individual para contrarrestar en lo posible los efectos letales de la devaluación del peso argentino, a pedir la vivificación del diálogo "4+1" entre el MERCOSUR y Estados Unidos, y, en la opinión de sus detractores internos, a, literalmente, "echarse en los brazos" de Washington. El unilateralismo se vio a las claras en la política comercial, con la aplicación de aranceles temporales a todas las importaciones, de dentro y de fuera de la zona, excepto los bienes de capital, a los que se retiró el gravamen del 8%, lo que contravenía el acuerdo sobre el Arancel Externo Común del MERCOSUR.

El uruguayo fue el anfitrión en Montevideo de dos reuniones del Consejo del MERCOSUR: la XXI, el 20 y el 21 de diciembre de 2001, y la XXV, el 15 y el 16 de diciembre de 2003, en la que se firmó un Acuerdo de Complementación Económica con Colombia, Venezuela y Ecuador, el cual debía ser la antesala de un área de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Más allá de las obligadas alocuciones de carácter institucional, Batlle, al volcarse en el elogio del ALCA y en la búsqueda de unas relaciones privilegiadas con Estados Unidos, fue visto como un estadista que no tenía fe en el MERCOSUR. Las llegadas al poder del socialista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y del peronista de izquierda Néstor Kirchner en Argentina en el primer semestre de 2003 hicieron que empezara a hablarse con propiedad de un "eje progresista sudamericano", dejando a Batlle aislado en este contexto.

4. La debacle financiera de 2002

Pero el verdadero *annus horribilis* para Batlle fue 2002, cuando quedó dramáticamente al descubierto la vulnerabilidad estructural de la economía de Uruguay y su condición, en una expresión divulgada esos días, de "país argentinodependiente". El derrumbe financiero y monetario en el Estado vecino a caballo entre 2001 y 2002 provocó la parálisis de los intercambios comerciales entre los dos países platenses. La imposición allí del corralito financiero, es decir, el bloqueo por el Gobierno de los depósitos bancarios para impedir la completa iliquidez del sistema, se tradujo aquí en la caída en picado de los ingresos generados por el turismo argentino y, mucho más grave, en un movimiento de retirada por los clientes no residentes, que en su mayoría eran también argentinos, de sus depósitos en bancos uruguayos por la desconfianza que les merecía la capacidad del Estado uruguayo para cumplir con sus responsabilidades financieras. Las tres principales agencias calificadoras de riesgo-país quitaron el grado de inversión a la deuda pública uruguaya.

La autoridad monetaria se aferró al tipo de cambio controlado del peso y el 28 de febrero la Asamblea General aprobó una ley llamada de ajuste o de responsabilidad fiscal por la que se creaba un Impuesto Adicional a las Retribuciones y Prestaciones con el único fin de financiar el

Banco de Previsión Social. El 25 de marzo el FMI anunció la concesión de un crédito stand-by de 743 millones de dólares por un período de 24 meses para que Uruguay pudiera aguantar el funesto efecto tango. Pero estos apañíos no surtieron efecto. El 16 de abril, la actividad económica quedó paralizada en una jornada de huelga nacional que convocaron, en un acto de unidad interconfederal inédito desde hacía 20 años, los gremios del PIT-CNT y la veintena larga de asociaciones patronales que integraban la Concertación por el Crecimiento. La protesta pretendía que el Gobierno se centrara en enfrentar las quiebras empresariales en cadena y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo.

El presidente depositó sus esperanzas en las asistencias del FMI y Estados Unidos. El 29 de mayo, la Cámara de Representantes, donde todavía funcionaba la alianza del PC y el PN, sacó adelante la Ley de Estabilidad Fiscal, con la que el Gobierno esperaba recaudar unos 230 millones de dólares hasta finales de año para cumplir la meta pactada con el FMI de reducir el déficit fiscal del 4,2% del PIB al 2,5% en 2002 y al 1,5% en 2003, con miras a alcanzar el equilibrio en 2004, mediante un rosario de cargas tributarias a los salarios, a las rentas de las empresas industriales, comerciales y agropecuarias, a los servicios públicos de agua, electricidad y telefonía, y a las sociedades anónimas.

En estas semanas de máxima inquietud por la evolución de la borrasca económica, Batlle protagonizó sendos incidentes en las relaciones bilaterales con dos países latinoamericanos, los cuales no le ayudaron a remontar sus agónicos niveles de aprobación popular, según indicaban las encuestas. La primera tarascada fue con Cuba. El voto de Uruguay, junto con Estados Unidos y la mayoría de países americanos allí presentes, a favor de una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de Ginebra que condenaba la falta de libertades políticas en el país caribeño desató la reacción desaforada de las autoridades comunistas y del propio Fidel Castro, que tacharon a Batlle de "genuflexo", "lacayo", "servil" "mentiroso de los grandes" y "Judas abyecto". La retahíla de insultos enfureció al presidente, que el 23 de abril, con el argumento de que Cuba había agraviado, no a él, sino a Uruguay, ordenó la ruptura de las relaciones diplomáticas y demandó a La Habana la retirada de su embajador en Montevideo.

El segundo incidente diplomático de 2002 se produjo con Argentina, cuyo presidente entonces era Eduardo Duhalde, y, a diferencia del anterior, fue totalmente provocado por el mandatario, aunque de manera involuntaria. Quien ya en ocasiones anteriores, a lo largo de su extensa carrera política y periodística, había hecho elevar muchas cejas con sus comentarios fuera de lo común causó un gran escándalo el 3 de junio cuando, durante la grabación de una entrevista televisada, y creyendo que hablaba off the record, se despachó a gusto con sus vecinos ante dos periodistas de la cadena Bloomberg que le sacaron a colación las similitudes entre las crisis de Argentina y Uruguay.

"La situación argentina es de los argentinos, con los problemas argentinos: ¡una manga de ladrones, del primero hasta el último! (?) ¿Usted conoce la Administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas en Argentina? ¿Sabe la clase, volumen y magnitud de corrupción que hay? (?) La Argentina no es el ombligo del mundo (?) No hay nadie en el mundo que necesite de la Argentina para vivir (?) Es la tragedia de los argentinos (?) Se pasan diciendo a ver quién es el culpable de no ayudarnos. Y no se dan cuenta que tienen que ayudarse a sí mismos". La locuacidad del presidente incluyó unos comentarios sobre su homólogo de Buenos Aires: "¿Cómo le voy a plantear a Duhalde nada? (?) No tiene fuerza política, no tiene respaldo, no sabe a dónde va (?) ¿Pero cómo le voy romper a un ciudadano que llegó por casualidad y

que se va no se sabe si esta semana que viene o en el mes de marzo?".

Al ver la polvareda que su "conversación particular" con los periodistas de Bloomberg estaba levantando (en realidad, muchos argentinos de a pie acogieron la mordacidad del estadista uruguayo a costa de su país con complacencia y regocijo), Batlle se apresuró a telefonar a Duhalde para expresarle sus excusas. Más aún, al día siguiente, 4 de junio, se personó en Buenos Aires para disculparse en persona ante él "y ante el pueblo argentino" de un "error" que se había debido a la "combustión espontánea" y el "apasionamiento" que le caracterizaban. Duhalde alabó la "hidalguía" del presidente uruguayo, que se fundió con él en un emotivo abrazo, y dio por "terminado absolutamente" el chusco episodio.

Pero no había respiro para Batlle. El 20 de junio, el ministro de Economía, Alberto Bensi3n, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), C3sar Rodr3guez Batlle (quien era primo carnal del jefe del Estado), anunciaron que, de conformidad con el FMI, ante la ineficacia de las medidas adoptadas para proteger la moneda nacional de la depreciaci3n ?ya se hab3an liquidado 1.100 de los 3.000 millones de d3lares en reservas-, el Gobierno renunciaba al esquema de bandas de fluctuaci3n y pon3a al real en libre flotaci3n, dejando que fuera el mercado cambiario el que fijara su cotizaci3n. Uruguay, por tanto, segu3a los traumáticos pasos adoptados por Brasil en enero de 1999 y por Argentina en enero de este 2002.

La mudanza monetaria tuvo dos efectos fulminantes: una devaluaci3n incontrolada (de un 40% con respecto al d3lar en el plazo de un mes) y un movimiento masivo de reintegros de ahorros bancarios, por temor a que se aplicara tambi3n aqu3 el corralito, que hizo resquebrajarse al sistema financiero. La aprobaci3n por el FMI el 26 de junio de un pr3stamo suplementario de 1.500 millones de d3lares, aunque confirmaba que el organismo no iba a dejar en la estacada a Uruguay ?a diferencia del caso argentino-, no consigui3 tranquilizar a los ciudadanos. El 22 de julio, el ministro Bensi3n, duramente criticado por el PN y Lacalle, present3 la dimisi3n, que secund3 Rodr3guez Batlle.

La cancelaci3n de dep3sitos devino una sangr3a dineraria tal que el Gobierno, luego de suspender el BCU las actividades de la Caja Obrera y el Banco de Montevideo por "incumplimiento de la normativa vigente", tuvo que decretar el feriado bancario el 30 de julio: hasta nuevo aviso, todos los bancos y cajas de ahorros dejaban de operar. Los mercados reaccionaron con pánico y el peso se depreci3 hasta las 35 unidades por d3lar. En esos momentos, las reservas del BCU estaban en un nivel hist3ricamente bajo, menos de 700 millones de d3lares. Desde enero, se hab3an evaporado el 45% de los fondos bancarios y el 78% de las reservas. En barrios de la periferia pobre de la capital ya se estaban produciendo saqueos de supermercados y almacenes. El Gobierno empez3 a repartir bolsas de alimentos. La confirmaci3n de que Uruguay padec3a, seg3n 3l mismo, "la peor crisis del siglo", oblig3 al presidente a cancelar su asistencia a la II Cumbre Sudamericana, que tuvo lugar en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil el 26 y el 27 de julio.

A comienzos de agosto, el PC y el PN negociaron y la Asamblea aprob3, todo en un tiempo r3cord, la denominada Ley de Creaci3n del Fondo de Fortalecimiento del Sistema Financiero, que daba luz verde a la reapertura de los bancos y establec3 restricciones a la retirada escalonada de los fondos congelados desde el "martes negro". De inmediato, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunci3 la conces3n de un cr3dito de 1.500 millones de d3lares

a corto plazo y como adelanto de la cantidad comprometida por el FMI, pero condicionado a una reestructuración total de la banca uruguaya. La quiebra total del sistema financiero fue evitada. El 5 de agosto el Gobierno levantó el feriado bancario.

El punto álgido de la crisis había pasado, pero sobre Batlle cayó un diluvio de reproches desde la opinión pública, que en su búsqueda de culpables por el desastre puso de relieve las sospechosas relaciones de amistad entre el presidente y los hermanos José, Juan, Dante y Jorge Peirano Basso, perseguidos por la justicia por haber provocado la quiebra del Banco de Montevideo con sus prácticas estafadoras a gran escala. La insistente afirmación por Batlle de que el sistema uruguayo era "serio" y solvente, y que no tenía nada que ver con el caos argentino, fue crudamente impugnada por los hechos. Si Uruguay no incurrió en el ominoso default, o suspensión de pagos, fue únicamente gracias al flotador que le lanzó el FMI y Estados Unidos. En estas circunstancias, la declaración de "fracaso del modelo neoliberal" hecha por el bloque centroizquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM) tuvo amplia repercusión en una ciudadanía que hasta la fecha se había distinguido por su conservadurismo y su renuencia a un cambio político de fondo.

El 28 de octubre, cuando la inflación alcanzaba el 26%, el mandatario recibió un rudo golpe político con el anuncio por Lacalle de que lamentaba que el PN hubiera apoyado al colorado en la segunda vuelta de las presidenciales de 1999, seguida de la retirada del Ejecutivo de los cinco ministros blancos. Era el final de la coalición bipartita. El año 2002 terminaba como uno de los más infaustos en la historia nacional, con una brutal recesión económica del 10,8% (cuatro años ya de crecimiento negativo), una inflación promedio del 14%, la deuda exterior rayana en los 10.000 millones de dólares, el paro disparado al 19% y la cuarta parte de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza.

5. Pérdida de la iniciativa política hasta el final del mandato

El presidente uruguayo encaró los dos últimos años que le quedaban en el poder con actitud reservada, como acomodándose en un compás de espera pautado por la resaca de la crisis económica, el inicio de la recuperación y las elecciones generales de 2004. Su último cartucho, el referéndum vinculante del 7 de diciembre de 2003 sobre la derogación de la ley que abolía el monopolio petrolero de la ANCAP y abría las puertas a la privatización del sector, salió mojado al ganar el sí con un contundente 63% de los votos, siendo la participación del 83%; era la primera vez que una opción respaldada por el PC y el PN sufría una derrota electoral.

Por otro lado, el impulso depurador de los crímenes de la dictadura se había detenido en seco. El 10 de abril de 2003 la CP publicó un informe final que pretendía dar un carpetazo concluyente a la espinosa cuestión, pero lo que consiguió fue indignar a los familiares de las víctimas y a las ONG. Según la CP, 26 de los desaparecidos denunciados estaban, en efecto, muertos; tras ser asesinados, sus cuerpos fueron incinerados en hornos crematorios y las cenizas resultantes, dispersadas. Sobre el destino final de los otros 12 desaparecidos la comisión no fue capaz de esclarecer nada. El presidente ya había prohibido a los militares declarar ante la CP y ahora, con el documento en la mano, rehusó también ordenar al alto mando la apertura de acuartelamientos para efectuar excavaciones y tomar pruebas forenses que confirmaran las conclusiones sobre los 26 casos supuestamente resueltos.

Días después, el 23 de abril, Batlle realizó una visita de trabajo a Washington. A la vuelta, en declaraciones a la prensa, explicó que el primer objetivo de su encuentro con George W. Bush en la Casa Blanca había sido transmitirle que Uruguay estaba "agradecido" por lo que su Gobierno había hecho por él, ya que "somos un país fantástico porque tenemos una gente de primera, pero si no nos hubieran dado una mano allá por el mes de julio del año pasado, habríamos desaparecido de la faz de la Tierra". También, aprovechó para llamar "asesino" a Castro.

Estas manifestaciones del presidente tuvieron más difusión que una postura del Ministerio de Relaciones Exteriores que, en apariencia, las contradecía: la negativa a firmar con el Departamento de Estado un acuerdo bilateral por el que Montevideo garantizaba la inmunidad de los súbditos estadounidenses frente a la acción extraterritorial de la Corte Penal Internacional (CPI). Al no someterse a esta exigencia antes de la fecha límite del 1 de julio, Uruguay se hizo acreedor de sanciones en materia de cooperación militar.

También a principios de julio de 2003, Batlle denunció en una entrevista televisada que hacía justo un año el FMI había intentado "un quiebre institucional" desde el momento en que el subdirector gerente del organismo, el chileno Eduardo Aninat, le pidió que "hiciera las valijas y llamara a elecciones", ya que Uruguay "no tenía ninguna posibilidad". Según el presidente, él respondió entonces que "de ninguna manera renunciaba". Con su peculiar oratoria, Batlle recordaba: "Estábamos muertos. Como nos decían que no a todo lo que planteábamos, terminábamos en la zanja".

Batlle y el oficialismo afrontaron las elecciones generales del 31 de octubre de 2004 con un espíritu de resignación y derrotismo: la victoria del EP-FA-NM era segura, y sólo quedaba la duda de si su candidato, Tabaré Vázquez, se haría con la Presidencia en la primera vuelta. Y, en efecto, así fue: con el 50,7% de los sufragios, el frenteamplista derrotó al blanco Jorge Washington Larrañaga Fraga, que recogió el 34,1%, y machacó al colorado Guillermo Eduardo Stirling Soto, veterano dirigente del Foro Batllista y ministro del Interior hasta el año anterior, cuando fue seleccionado como el candidato unitario del Foro Batllista y el Batllismo Radical. Stirling marcó las distancias con el presidente saliente, cuya gestión estaba indeleblemente marcada por la gran crisis de 2002, pero sólo recogió el 10,3% de los votos.

En las legislativas, el PC se hundió hasta la cuota de los 10 diputados y los 3 senadores. Eran los peores resultados de su historia. Batlle consiguió el escaño de senador como cabeza de la lista colorada Uruguay es Posible, pero renunció a ocuparlo; el mandato legislativo pasó al primer suplente, Isaac Alfie, a la sazón ministro saliente de Economía. Los otros dos senadores electos del PC eran Juan Justo Amaro por Uruguay es Posible y Sanguinetti por el Foro Batllista. En la misma jornada se celebró un plebiscito, convocado por iniciativa popular y respaldado matizadamente por el EP-FA-NM y el PN, sobre una reforma constitucional que otorgara al Estado el monopolio de los servicios de saneamiento y suministro de agua potable, siendo el resultado de la consulta afirmativo.

El 1 de marzo de 2005, Batlle, a sus 77 años, transmitió el mando a Vázquez. Al estadista le cupo la satisfacción postrera de legar una economía floreciente: 2004 había cerrado con un crecimiento del PIB del 12,3%, espectacular tasa que obedecía al excelente comportamiento de las exportaciones, en un contexto de bonanza regional ?las economías de Argentina y Brasil

también crecían vigorosamente-, de apertura de los mercados estadounidenses y de debilidad del dólar frente al euro. Además, la inflación era inferior al 8%, el peso estaba estabilizado y volvía a haber liquidez, situación a la que había contribuido, además de la asistencia crediticia de Estados Unidos y el FMI, un exitoso canje de deuda con tenedores de bonos privados que había prorrogado los vencimientos.

Jorge Batlle está casado en segundas nupcias con Mercedes Menafra. De su primer matrimonio con la argentina Beatriz Lamuraglia tiene dos hijos, Beatriz y Raúl Lorenzo, y cuatro nietos.

(Cobertura informativa hasta 24/3/2006)